

**Respuestas de la Argentina al cuestionario distribuido por los cofacilitadores designados según la Decisión 13/1 del Grupo de Trabajo Abierto sobre Envejecimiento.**

**I. Respuestas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)**

**Determinación de posibles deficiencias en la protección de los derechos humanos de las personas de edad y la mejor forma de subsanarlas**

**CUESTIONARIO**

**Contexto**

El Grupo de Trabajo de composición Abierta sobre el envejecimiento, en su decisión 13/1, adoptada en el 13º período de sesiones, pidió a los co-facilitadores que, de conformidad con la resolución 77/190, presenten un proyecto de recomendaciones negociadas a nivel intergubernamental sobre el marco internacional vigente en materia de derechos humanos de las personas de edad y las posibles deficiencias y opciones sobre la mejor forma de subsanarlas para que se examinen en el 14º período de sesiones del Grupo de Trabajo y se sometan a la consideración de la Asamblea General.

El propósito de este cuestionario es facilitar el examen del marco internacional existente de los derechos humanos de las personas de edad y la identificación de posibles lagunas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad y la mejor manera de abordarlas.

El cuestionario se enviará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los observadores en la Asamblea General, a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a las organizaciones no gubernamentales con estatuto ECOSOC y a las organizaciones previamente acreditadas ante el Grupo de Trabajo, así como a los Fondos, Programas, Organismos Especializados y otras Entidades de las Naciones Unidas.

**Las preguntas**

*Identificación de lagunas*

1. Para cada uno de los temas que han sido examinados por el Grupo de Trabajo de composición abierta desde su octavo período de sesiones, sírvase indicar las posibles lagunas que su gobierno/organización haya detectado en el marco normativo y la aplicación práctica para la protección de los derechos humanos de las personas de edad. (500 palabras cada una)

- a) Igualdad y no discriminación
- b) Violencia, abandono y abuso
- c) Cuidados paliativos y a largo plazo
- d) Autonomía e independencia
- e) Protección social y seguridad social (incluidos los niveles mínimos de protección social)
- f) Educación, capacitación, aprendizaje permanente y creación de capacidad
- g) Derecho al trabajo y acceso al mercado laboral
- h) Acceso a la justicia
- i) Contribución de las personas de edad al desarrollo sostenible
- j) Seguridad económica
- k) Derecho a la salud y acceso a los servicios de salud
- l) Inclusión Social
- m) Accesibilidad, infraestructura y hábitat (transporte, vivienda y acceso)<sup>1</sup>
- n) Participación en la vida pública y en los procesos de adopción de decisiones<sup>2</sup>

**Respuesta:**

**La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDHPM), aprobada en Argentina en el año 2017 mediante Ley N° 27.360, adquirió jerarquía constitucional en el mes de noviembre del año 2022 a través de la Ley N° 27.700. La misma se constituye en un instrumento jurídico de carácter vinculante para el ordenamiento jurídico interno de nuestro país, brindando un marco de protección específico a los derechos humanos de las personas mayores, y compeliendo al Estado a poner en marcha políticas públicas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los principios, deberes y derechos protegidos establecidos en la misma, los cuales comprenden todos los temas examinados por el Grupo de Trabajo de composición abierta.**

**No obstante lo expuesto, es escasa la legislación interna que regula de modo específico los temas que han sido examinados por el Grupo de Trabajo de composición abierta, lo cual representa posible lagunas.**

**Sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar en relación a la legislación interna, que actualmente el parlamento argentino se encuentra debatiendo un Proyecto de Ley de “Promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores” (Expedientes N° S-2099/22 y N° S-2224/23), que tiene por objeto velar por la defensa y la promoción de los derechos y erradicar toda práctica que constituya violencia hacia las personas mayores, de 60 o más años, en los términos y condiciones establecidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.**

---

<sup>1</sup> A debate en la 14ª sesión del Grupo de Trabajo Abierto sobre el Envejecimiento

<sup>2</sup> A debate en la 14ª sesión del Grupo de Trabajo Abierto sobre el Envejecimiento

De esta manera, el proyecto de ley tiene entre otros propósitos: a) promover el buen trato hacia las personas mayores en todos los ámbitos públicos; b) eliminar toda forma de discriminación, en todo orden de la vida, que menoscabe los derechos de las personas mayores, cualquiera sea su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, cultura, religión y/o capacidades psicofísicas; c) fomentar el derecho de las personas mayores a vivir una vida sin violencia; d) sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores en cualquiera de sus ámbitos; e) desarrollar políticas públicas de carácter transversal sobre violencia contra las personas mayores; f) remover patrones socioculturales que promueven y sostienen las relaciones de poder sobre las personas mayores, prejuicios y estereotipos negativos sobre ellas; g) estimular el empoderamiento de las personas mayores; h) soslayar el aislamiento de las personas mayores impulsando actividades intergeneracionales; i) eliminar la superposición de intervenciones y agilizar los trámites necesarios para el eficiente acceso a la justicia, con el fin de evitar su revictimización; j) atenuar los daños derivados de la violencia ejercida sobre las personas mayores; y k) promover la erradicación de las contenciones físicas a las personas mayores en todos los ámbitos en donde se las asista, ya sea en forma permanente o transitoria, públicos o privados.

En este marco, es importante destacar que el Estado Nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las personas mayores que padecen violencia y a las personas que las ejercen, debiendo comprometerse en la implementación de algunas de las acciones como:

- a) Generación de campañas de difusión que tengan por objetivo erradicar los estereotipos negativos respecto de la vejez y hacer conocer a la comunidad los derechos de las personas mayores;
- b) Implementación de una línea telefónica única, gratuita y accesible en todo el país, destinada a la contención, información y asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las personas mayores y asistencia a quienes la padecen;
- c) Creación de unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, y que coordinen sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y que tienen un abordaje integral de las siguientes actividades;
- d) Implementación de Programas de asistencia económica para el autovalimiento de las personas mayores;
- e) Desarrollo de Centros de día para el fortalecimiento integral de las personas mayores;
- f) Creación de instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas mayores que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique

una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, debiendo estar orientada a la reintegración inmediata a su núcleo familiar, residencial, social y laboral;

**g) Implementación de Programas de reeducación destinados a las personas que ejercen violencia sobre las personas mayores.**

### *Opciones sobre la mejor manera de colmar las lagunas*

1. Por favor, indique cómo su gobierno/organización se ha comprometido con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos (por ejemplo: órganos de tratados del examen periódico universal (EPU), procedimientos especiales, mecanismos regionales), específicamente con respecto a las personas mayores. (500 palabras)

#### **Respuesta:**

**El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) participó a través de su Secretaría General de Derechos Humano, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de diversas instancias de carácter internacional y regional en materia de protección de derechos humanos para personas mayores. En este contexto cabe destacar la participación en la 11 ° sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento realizada en el año 2021, y que fuera organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la misma, se abordaron entre otras temáticas las referentes a los Derechos Humanos de las personas mayores en contexto de pandemia, como así también el acceso a la justicia para personas mayores. En tal contexto se resaltó la relevancia de fortalecer el trabajo hacia la elaboración de una Convención Universal sobre los Derechos Humanos de las Personas mayores.**

**Asimismo, se participó en la 12 ° sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento realizada en el año 2022, en la cual se reforzó la necesidad de contar con un instrumento vinculante de carácter internacional destinado a la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En este contexto se abordó la problemática referente a la discriminación por edad, como así también a la vulneración de derechos de las personas de edad debido a la pobreza que padecen como así también a la falta o escasa protección social en muchos países del mundo, lo cual se incrementó significativamente en contexto de pandemia.**

**Finalmente cabe destacar la participación de PAMI como invitado en diversas instancias realizadas en el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos en el Mercosur (RAADDHH), en post del trabajo conjunto para lograr el desarrollo y consolidación de la agenda de los sistemas de cuidados. En este sentido se colaboró en una propuesta de**

recomendación del Consejo del Mercado Común tendiente a que los Estados parte propicien una agenda sobre políticas y programas de promoción, protección y restitución de los Derechos Humanos de las personas mayores, comprendidas como sujetos plenos y activos de sus derechos, con adecuación a los lineamientos de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

2. ¿Han tenido estos compromisos un impacto positivo en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de las personas mayores? Explíquelo. (500 palabras)

**Respuesta:**

En primera instancia cabe destacar que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tiene carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, con facultad para otorgar prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

PAMI representa la obra social más grande de Latinoamérica, cuenta con más de 4 millones y medio de personas mayores afiliadas, e implementa el Programa de Asistencia Médica Integral, que incluye prestaciones antes mencionadas.

En el contexto mencionado, la participación de PAMI en las instancias mencionadas representan un impacto positivo, no sólo en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de las personas mayores, sino también en la consolidación de las relaciones interinstitucionales.

3. ¿Qué otras opciones pueden considerarse para reforzar la protección de las personas mayores? Explíquelas. (500 palabras)

**Respuesta:**

En febrero del año 2020, fue creada dentro del Instituto la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, con el objetivo de formular, diseñar y ejecutar políticas y programas basados en el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, lo que sin dudas refuerza la protección hacia esta población.

En este sentido, la Secretaría propicia normativa sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores; establece protocolos que promuevan el buen trato y combatan el maltrato hacia las personas mayores; promueve una política de cuidados desde los niveles de menor complejidad (cuidados comunitarios) hasta los más complejos (cuidados institucionales); diseña y ejecuta programas de atención psicosocial y deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias para personas mayores; promueve la salud, la autonomía y la

participación social de las personas mayores; formula y ejecuta programas con perspectiva de género y diversidad sexual en las personas mayores, transversales a todos los programas del Instituto; planifica, ejecuta y evalúa líneas de acción específicas de promoción, protección, integración social y desarrollo de las personas mayores; genera y lleva adelante programas y acciones de capacitación en gerontología comunitaria, género, diversidad sexual, derechos humanos, cuidados a largo plazo, buen trato, entre otras, destinadas a los recursos humanos que trabajen con personas mayores; y promueve campañas de concientización sobre la imagen positiva de la vejez rompiendo mitos y estereotipos.

4. *Si procede*, ¿cuál es su valoración sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores según los instrumentos regionales e internacionales? (500 palabras)

**Respuesta:**

La aprobación de la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores por Ley 27.360, y el posterior otorgamiento de jerarquía constitucional de este Tratado de Derechos Humanos por Ley 27.700, constituye en la actualidad, la culminación de todo un complejo movimiento de visibilización de las personas mayores como sujetos de derechos y de búsqueda de una mayor protección de sus derechos, así como también se instituye en un instrumento que representa el punto de partida de un proceso de reformas normativas e institucionales orientadas a que este nuevo enfoque termine impactando en la realidad y la vida de las personas mayores.

En este marco, y sin perjuicio de contar con este instrumento de carácter fundamental para Argentina, se considera esencial generar nuevos instrumentos normativos internos que regulen y reglamenten específicamente la efectivización de los principios y derechos establecidos, como así también generar espacios de sensibilización, promoción y difusión destinados al conjunto de la sociedad con el propósito de consolidar la protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Asimismo, a nivel global, dado que el marco jurídico internacional brinda una cobertura fragmentada e inconsistente de los derechos humanos de las personas mayores, Argentina considera que es necesario adoptar una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores.

#### **Plazo**

La fecha límite para enviar las respuestas al cuestionario es el **24 de noviembre de 2023**.

Todas las respuestas se publicarán en línea.

Las respuestas deben ser dirigidas a Stefano Guerra ([stefano.guerra@mne.pt](mailto:stefano.guerra@mne.pt)) y Pedro Paranhos ([pedro.paranhos@itamaraty.gov.br](mailto:pedro.paranhos@itamaraty.gov.br)) con copia a [ageing@un.org](mailto:ageing@un.org)

## II. Respuestas de la Dirección Nacional de Políticas Para Adultos Mayores (DINAPAM)

### Cuestionario: Identificación de los posibles vacíos en la protección de los derechos humanos de las personas mayores y cómo abordarlos

---

Desde hace varias décadas, la República Argentina se encuentra atravesando un proceso de envejecimiento poblacional y representa actualmente uno de los países más envejecidos de la región. Según el último censo poblacional realizado, en el año 2022 la población de 60 años y más asciende al 15,7% de la población total, casi 7,1 millones de personas. Del total, 18,4% son mujeres de 60 años y más, mientras que para los varones este valor es de 14,6% (INDEC, 2022).

El aumento demográfico de la población adulta mayor a nivel mundial (entre 2015 y 2030 la población de 60 años y más se elevará de 900 millones a más de 1.400 millones de personas), no es ajeno a la realidad argentina.

Con la adopción en el año 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las personas mayores fueron incorporadas en algunos de los logros previstos en el mentado instrumento.

Dicha circunstancia marcó una responsabilidad para el Estado Argentino de trabajar en la aplicación de políticas públicas tendientes a lograr los derechos fundamentales de las personas mayores previstos en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y su participación de manera directa en la sociedad para el cumplimiento de los objetivos previstos en la agenda 2030.

Ahora bien, en la actualidad en nuestro país existen varias instituciones que se encargan de la temática de la vejez y el envejecimiento. Ellas son:

1. Ministerio de Desarrollo Social a través de su Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores.
2. Ministerio de Salud, con su Dirección de Personas Adultas y Mayores.
3. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
4. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

## 5. La Secretaría de Derechos Humanos.

En relación a las distintas preguntas del cuestionario encomendado “Identificación de posibles vacíos en la protección de los derechos humanos de las personas mayores y cómo abordarlo” solicitado desde el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, se vuelve importante destacar que Argentina, en el año 2017, mediante la Ley N° 27.360, ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante CIPDHPM) - investida de carácter supra legal- adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General, el 15 de junio de 2015, reconociendo de esta forma a las personas mayores como sujetos de derecho y activos dentro de la sociedad.

En particular el art. 31 de la Convención establece los requisitos, garantías y obligaciones del estado para un adecuado acceso a justicia de las personas mayores.

La Constitución Nacional de la República Argentina, mediante el artículo 75 inc. 22 otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados de Derechos Humanos, que obligan a los diferentes poderes del Estado a adoptar medidas que efectivicen lo previsto en la normativa interamericana, como así también los actos jurisdiccionales de los tribunales argentinos deben ser acordes a lo previsto en la legislación internacional impuesta en los tratados ratificados por nuestro país.

La convención se vuelve una herramienta imprescindible para garantizar el acceso a los derechos de las personas mayores. Entre esos derechos se destacan el valor, la participación y el protagonismo en sus comunidades; así como también la dignidad, no discriminación, independencia y el respeto a su autonomía. Este marco normativo de jerarquía constitucional se vuelve fundamental para marcar el rumbo de las acciones y políticas gerontológicas desde el enfoque de derechos.

Al lograr esta jerarquía constitucional, los derechos de las personas mayores están en paridad con los de otros grupos en situación de vulnerabilidad que están identificados y amparados en documentos internacionales que lograron igual rango, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

A pesar de ello, en nuestro país aún no existe legislación nacional que específicamente garantice la igualdad para las personas mayores, así como no hay legislación que prohíba explícitamente la discriminación en base a la edad. Tal vez este sea uno de los grandes vacíos en la protección de los derechos humanos de las personas mayores y el desafío que nos compromete en años venideros.

Sin embargo, en los últimos años, se ha consolidado la institucionalidad pública dirigida a las personas mayores tendientes a proporcionar los mecanismos, instrumentos y recursos para asegurar la efectividad de los derechos.

Particularmente, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) tiene a su cargo el diseño y la implementación de políticas y acciones dirigidas a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas mayores del país. Su objetivo es diseñar y ejecutar programas de promoción, protección e integración social de las personas mayores. Sus lineamientos están agrupados en diferentes áreas, en cada una de las cuales se llevan adelante acciones desde una mirada integral y un enfoque de derechos.

Las políticas públicas implementadas por la Dirección se enmarcan en ejes que apuntan al fortalecimiento familiar y a las políticas de género y de derechos humanos. En función de ello, la Dirección se propone:

- Generar iniciativas y acciones tendientes al buen trato, al pleno goce de derechos y el envejecimiento activo con perspectiva de género.
- Ampliar el sistema progresivo de atención a la vejez.

- Fortalecer la articulación interinstitucional con otros organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.
- Promover y difundir el saber gerontológico a nivel nacional, provincial, municipal y con organizaciones no gubernamentales.
- Desarrollar proyectos socioculturales en los que los adultos mayores sean protagonistas.

Asimismo, la Dirección es responsable del funcionamiento del Consejo Federal de Adultos Mayores, que nuclea y articula la implementación de las políticas destinadas al sector.

Desde el 2012, la DINAPAM, del Ministerio de Desarrollo Social, y más recientemente desde El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), se trabaja el Programa Nacional de “Buentrato” hacia las personas mayores estando las campañas nacionales orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre esta temática y a desarmar los mitos y prejuicios construidos socialmente sobre la vejez.

La “Campaña Nacional de Promoción del Buentrato hacia las Personas Mayores” se realiza una vez al año y busca generar concientización y sensibilización a través de acciones que promuevan el buentrato hacia las personas mayores en todo el país, que fomenten una mirada positiva y de empoderamiento en las personas mayores en la comunidad.

Algunos de sus objetivos generales son, promover la cultura del Buen trato hacia los/las adultos/as mayores, en tanto sujetos de pleno derecho, atendiendo las relaciones interpersonales y los vínculos que mantienen con el entorno físico, social y cultural, Sensibilizar a la sociedad en general y a los medios de comunicación sobre la importancia del buen trato hacia las personas mayores, brindando información y capacitación acerca de los derechos en la vejez; reconocer a las personas mayores como sujetos activos y con potenciales para desarrollar, empoderando y promocionando sus capacidades materiales y simbólicas y contribuir a erradicar los prejuicios sociales, mitos, imágenes y palabras que conforman estereotipos negativos sobre las personas mayores, construyendo y promoviendo una imagen positiva de la vejez y el envejecimiento.

Por su parte, en el año 2019, se constituyó el Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad como respuesta al compromiso asumido para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas. El Ministerio tiene a su cargo entre sus funciones, articular acciones con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas de género, igualdad y diversidad; entender en el diseño e implementación de las políticas de formación y capacitación en materia de género, igualdad y diversidad. Ahora bien, la emergencia sanitaria del covid-19 visibilizó la centralidad de los cuidados en nuestra vida, en la sociedad y la economía. Es entonces, que desde el Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad se fomentó la conformación de “La Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado”, la cual reúne a 15 organismos del Poder Ejecutivo Nacional con el fin de debatir y planificar políticas que aporten a una organización social del cuidado más justa, que logren una mejor redistribución familiar y social de la tarea, así como mejor redistribución entre los géneros, y que aporten a reconocer el cuidado como una necesidad, como un trabajo y como un derecho.

En esta misma línea de acción, el INSSJP- PAMI se creó la Subgerencia de Políticas de Género, Diversidad Sexual y Disidencias: esta área tiene como objetivo formular, diseñar y ejecutar políticas y programas que combatan la discriminación por género, la diversidad sexual o identidad sexual, e instrumentar proyectos, prestaciones y servicios pertinentes de promoción, prevención y asistencia con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género.

En esta misma línea, la perspectiva de género se encuentra vigente en todas líneas de acción que conforman el sistema progresivo de atención de la DINAPAM. La misma se halla presente tanto en los contenidos de la formación como en la realización de jornadas para equipos técnicos, profesionales y cuidadores donde se abordan aspectos tanto al género como al abordaje de las sexualidades en contextos de cuidados integrales. En particular, el manual de formación del Programa Nacional de Cuidadores/as Domiciliarios/as contiene una perspectiva de género transversal que se plasma específicamente en el capítulo sobre género y diversidad.

Ademas, dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) funciona una línea de Asistencia a Víctimas de Discriminación, Racismo y Xenofobia para la realización de denuncias y consultas.

En lo que respecta al punto c) del cuestionario, podríamos señalar que actualmente no existe marco legal nacional que exija formación para el cuidado a largo plazo por fuera la CIPDHPM. No obstante, como se ha señalado con anterioridad la formación gerontológica es considerada una línea de acción estratégica de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. Por ello, contamos con un área destinada a la formación de recurso humano para la atención domiciliaria con una perspectiva de protección integral de derechos, y, por el otro, jerarquizar el rol de los/as cuidadores/as domiciliarios/as, a través de la profesionalización de su tarea mediante la promoción de fuentes formales de trabajo. Todo ello en pos de mejorar la calidad de vida de las personas mayores brindando respuestas acordes a sus necesidades de cuidado. El área de “cuidados en la comunidad” dependiente de la DINAPAM, tiene como objetivo promover sistemas progresivos de atención, formando recurso humano especializado para la atención domiciliaria, comunitaria e institucional de personas mayores.

En este punto, se vuelve importante destacar que la Dirección Nacional cuenta con un Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios. El mismo, es un dispositivo web que funciona a través de la página <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/registrocuidadores>, mediante el cual se accede a información de personas que brindan su servicio como cuidadores/as domiciliarios/as de personas mayores en todo el país, y que cuentan con formación acreditada para ejercer ese rol, con el fin último de facilitar el vínculo y la articulación entre los diferentes agentes y las familias o los usuarios.

En función de responder a las necesidades de la comunidad, se establecen convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales, para las siguientes líneas de acción:

- Curso de formación de cuidadores domiciliarios
- Curso de actualización para cuidadores domiciliarios
- Curso de capacitación en deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias para cuidadores domiciliarios

- Curso de capacitación en autonomía personal y accesibilidad universal para cuidadores domiciliarios
- Curso de capacitación en cuidados paliativos para cuidadores domiciliarios de personas mayores

Particularmente, contamos la Capacitación en Cuidados Paliativos se encuentra dirigida a cuidadores y cuidadoras domiciliarias que estén interesados en adquirir herramientas y conocimientos específicos, que permitan dar respuestas a las necesidades de las personas mayores que atraviesen una enfermedad crónica en etapa terminal.

La Medicina Paliativa es reconocida como especialidad a partir de la Resolución 1814/2015 del Ministerio de Salud.

El Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece las prestaciones que deben ser brindadas, como mínimo, por las Obras Sociales Nacionales y las empresas de medicina prepaga, incluye a los cuidados paliativos a partir de la Resolución 201/2002 del Ministerio de Salud de la Nación, que establece en el párrafo referido al tema:

“8.1. El cuidado paliativo es la asistencia activa y total de los pacientes por un equipo multidisciplinario, cuando la expectativa de vida del paciente no supera el lapso de 6 meses, por no responder al tratamiento curativo que le fue impuesto. Los objetivos aquí serán aliviar el dolor, los síntomas y el abordaje psicosocial del paciente. La cobertura estará dada en función del marco general que marca el PMO, es decir que los Agentes del Actualización Normativa Nº 1/2002 - S.S.SALUD 5 Seguro se encuentran obligados a brindar las prestaciones que se mencionan en los Anexos II y III con un 100% de cobertura.”

Es decir, tanto las Obras Sociales del sistema nacional (las comprendidas dentro de las Leyes 23.660 y 23.661, habitualmente conocidas como “obras sociales nacionales” u “obras sociales sindicales”) como las empresas de medicina prepaga deben financiar las prestaciones de cuidados paliativos.

Por otro lado, la ley 26529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud (modificada por la ley 26.742) establece en el artículo 5, punto H, “el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o

padecimiento.” Su decreto reglamentario define los cuidados paliativos como “la atención multidisciplinaria del enfermo terminal destinada a garantizar higiene y confort, incluyendo procedimientos farmacológicos o de otro tipo para el control del dolor y el sufrimiento”.

Además, en el marco del Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud se implementa el Programa Nacional de Cuidados Paliativos (resolución 1253-E/2016 del Ministerio de Salud de la Nación) cuyos objetivos son, por un lado, la promoción de la atención continua e integrada de todos los pacientes oncológicos a lo largo de su enfermedad poniendo especial énfasis en prevenir el sufrimiento y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Y a su vez, el logro del alivio del dolor y el acceso a la medicación opioide sea una realidad efectiva para todos los pacientes del país, eliminando las barreras de accesibilidad para estos medicamentos.

En los últimos años, se ha consolidado la institucionalidad pública dirigida a las personas mayores tendientes a proporcionar los mecanismos, instrumentos y recursos para asegurar la efectividad de los derechos. En este sentido, se crearon instituciones a nivel provincial y municipal para dar respuestas a nivel local a las personas mayores. Por otro lado, se fortalecieron organismos dedicados a la vejez y el envejecimiento a nivel nacional, siendo que el 92% de las instituciones públicas provinciales cuentan con organismos propios orientados a las personas mayores.

La mayoría de estos organismos tienen rango de dirección provincial, lo que constituye un logro en el fortalecimiento de la institucionalidad. Estas direcciones pusieron en marcha una gran variedad de programas para atender las necesidades de las personas mayores y también para promover su autonomía y participación.

Asimismo, en las provincias se han desarrollado los Consejos Provinciales de Adultos Mayores en los que se debaten las principales necesidades y orientaciones en materia de políticas públicas para la vejez y el envejecimiento con un criterio federal.

Como mencionamos anteriormente, en cuanto a los avances legislativos, mediante la Ley Nº 27360, se consagró un nuevo paradigma positivo en torno a la vejez y asumiendo el compromiso de poner en marcha políticas públicas que concreten los derechos contemplados

en la misma. La CIPDHPM define principios como la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros. La relevancia de este instrumento radica en el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho, sentando las bases para que la legislación de los países y sus políticas públicas avancen hacia acciones concretas que permitan a las personas mayores desenvolverse en una sociedad que respete sus derechos.

Desde la Dirección Nacional de políticas para adultos mayores, se busca implementar a lo largo de todo el país, cursos, talleres y capacitaciones para que las personas mayores tengan la posibilidad de participar de actividades que optimicen sus oportunidades de bienestar físico, mental y social. Para ello, la DINAPAM cuenta con el Área de educación, cultura y comunicación comunitarias.

El área tiene el propósito de promover espacios de promoción de derechos, fomentando proyectos socioculturales, educativos y de comunicación comunitaria para la participación de personas mayores. El proyecto “La experiencia cuenta” busca recuperar los saberes y habilidades de las personas mayores para ponerlos a disposición de su comunidad. Consiste en la transmisión de oficios tradicionales por parte de personas mayores a personas más jóvenes. Los y las aprendices tienen la oportunidad de mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral mediante la adquisición de un conocimiento y/o habilidad que no está disponible en la oferta educativa formal, mientras que las personas mayores cumplen el rol de formadores.

Por su parte, el proyecto “Bien activos”, tiene como objetivo garantizar el acceso a la actividad física y recreativa de las personas mayores que no tienen la posibilidad de participar de estos espacios –por razones socioeconómicas o culturales- o aquellas que no hayan incorporado este tipo de hábitos. El proyecto hace hincapié en el bienestar físico, la salud y la seguridad alimentaria de las personas mayores, para la promoción de un envejecimiento activo.

En relación al punto relativo al derecho al trabajo y el mercado laboral, si bien no existen medidas específicas para la participación o reinserción de trabajadores mayores al mercado

laboral, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, implementa diversos programas de empleo y formación en beneficio de las personas adultas mayores. Los mismos, establecen como única condición que la persona mayor esté desocupada, y que no reciban una jubilación o pensión.

Dentro de estos se encuentran: Programa de Inserción Laboral (PIL): tiene como objetivo promover la inserción laboral de trabajadores y trabajadoras con mayores dificultades de empleabilidad, brindando a las empresas que los y las contraten una ayuda económica del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que cubre parte de su salario.

Por otro lado, Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (ETP): brinda incentivos económicos a las empresas para que entren aprendices en los puestos que necesitan. Luego tienen la posibilidad de incorporar a esos/as aprendices ya entrenados/as. El Programa tiene como objetivo general mejorar las condiciones de empleabilidad de trabajadores y trabajadoras desocupados/as y contribuir al fortalecimiento de la productividad y competitividad de las empresas a partir de la posibilidad de formar personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades.

Ahora bien, en cuanto al acceso a la justicia, el envejecimiento también puede transformarse en una causa de vulnerabilidad para el ejercicio de los derechos en el sistema de administración. En el aparato judicial, la persona mayor puede enfrentarse con varias dificultades como las dificultades de desplazamiento por restricciones físicas o por razones de dependencia económica. Asimismo, la utilización de un lenguaje excesivamente técnico e incomprensible, junto con la invisibilidad, la negligencia y el maltrato, contribuyen a reafirmar su vulnerabilidad, obstaculizando el ejercicio pleno de sus derechos y de su capacidad jurídica (PAMI: 2023).

Sumado a la brecha digital y la progresiva digitalización de los procedimientos legales, que se terminó de profundizar con la pandemia por COVID-19, obstaculizan el derecho de acceso a la justicia, el cual se configura como una garantía del derecho de igualdad, en la medida que supone que los Estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y hagan efectivo su derecho, sin sufrir discriminación alguna de por medio.

En Argentina, el acceso a la justicia para las personas mayores se encuentra en el art. 31 de la CIDHPM, siendo esta la única norma de orden legal vigente en el ámbito internacional que lo describe de modo específico para este grupo poblacional. En este contexto, se vuelve una necesidad primordial el trabajar en la concientización, capacitación, accesibilidad, disponibilidad y recursos efectivos para resolver estas problemáticas que padecen específicamente las personas mayores.

En 2008 se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación la Oficina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la cual promueve políticas, divulga información, capacita y busca generar conciencia sobre los derechos humanos de las personas mayores. En este marco, la Oficina atiende consultas de la población beneficiaria relacionadas con situaciones de abuso y maltrato psicológico y económico, o para asesorar en la resolución del acceso a derechos económicos, sociales y culturales. En este marco, la Oficina atiende consultas de la población beneficiaria relacionadas con situaciones de abuso y maltrato psicológico y económico, o para asesorar en la resolución del acceso a derechos económicos, sociales y culturales.

Además, sistemáticamente se crearon instituciones a nivel provincial y municipal para dar respuestas a nivel local a las personas mayores y se fortalecieron organismos dedicados a la vejez y el envejecimiento a nivel nacional, siendo que el 92% de las instituciones públicas provinciales cuentan con organismos propios orientados a las personas mayores.

La participación en el mercado laboral, se reduce en los grupos de edad avanzada, motivo por el cual se torna fundamental que dicho grupo poblacional cuente con regímenes de seguridad social y redes de apoyo.

Actualmente, la misma alcanza al 89.1% de las personas mayores; ello significa a 9 de cada 10 mujeres y varones en edad de jubilarse. Es decir, que casi la totalidad de las personas mayores que residen en Argentina tienen una jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva, gracias a la cual tienen garantizado un ingreso y acceso a cobertura médica acorde con el sistema previsional. En este punto, es importante destacar que la cobertura previsional en

Argentina es una de las más altas de la región y resulta fundamental para financiar los servicios de cuidados en la vejez.

Cuando remitimos políticas públicas adoptadas en materia de seguridad económica para las personas mayores, podemos destacar que en el año 2008 se eliminó el sistema privado de capitalización (AFJP), creándose como consecuencia el Sistema Integral Previsional Argentino, de esta forma el Estado Nacional buscó ampliar y mejorar la cobertura de seguridad social de las personas mayores.

Más recientemente, dentro las medidas más importantes se destacan la implementación de moratorias previsionales, que permitieron la inclusión mediante la jubilación de las personas mayores que habían trabajado, pero a las que no se les habían realizado aportes, política que favoreció principalmente a las mujeres. Desde el 2016 se creó la Pensión Universal para las Personas Mayores de 65 años (PUAM) que no hayan realizado la totalidad de los aportes al sistema previsional a través de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados N° 27.260, la cual establece, además de la regularización los juicios previsionales y la actualización de haberes para jubilados y pensionados, la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Por su parte, en junio del 2021, se puso en marcha una política central para asegurar la universalidad del derecho de las mujeres a jubilarse, contribuyendo a reparar la brecha de acceso a la seguridad social que ha perjudicado a las mujeres con hijos/as la hora de llegar a la prestación jubilatoria: el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Esta medida, dirigida a aquellas mujeres con hijas o hijos que, habiendo cumplido la edad jubilatoria, carecen de los años de aportes requeridos, busca visibilizar y reparar una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, de manera de reconocer y valorar el tiempo que las mujeres han destinado a la crianza de sus hijas e hijos.

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social, en el marco de la emergencia sanitaria y económica relanzó en el 2020, el Programa de créditos personales para las y los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hija e hijo. Entre las medidas que implementó ANSES al inicio de la pandemia, se dieron bonos extraordinarios a las personas jubiladas que les permitieran hacer frente a las dificultades económicas, y con posterioridad se

modificó la fórmula jubilatoria para que los ingresos percibidos compensaran inflación. Por otra parte, se aumentó el mínimo no imponible de Impuestos a las Ganancias, lo que eximió a las personas jubiladas que ganan hasta 8 jubilaciones mínimas.

Además, en el año 2020 se puso en marcha una política de medicamentos gratuitos para las personas afiliadas, a la cual accedieron más de 3,5 millones de personas. La medida permite que las personas afiliadas ahorren en promedio \$18.922 mensuales. En el marco de la pandemia por COVID-19, se instrumentó la receta electrónica, la telemedicina, se ampliaron las camas de terapia intensiva, se crearon dos hospitales nuevos y 4 centros Covid. Además, tiene en marcha el programa Residencias Cuidadas donde se brinda una atención especial y personalizada a las personas que viven en residencias de larga estadía (RLE).

Cuando hacemos referencia al derecho a la salud, es importante señalar que actualmente, la afiliación a coberturas de salud es prácticamente universal en la población en edad jubilatoria: el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es una obra social específica para las personas mayores e incluye a aquellas de 70 años y más sin jubilación.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores. PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica. Acompañamos a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas. El Programa de Asistencia Médica Integral incluye prestaciones médicas y sociales, porque una vida activa es clave para gozar de una buena salud con más de 600 Agencias de Atención y 38 Unidades de Gestión Local, donde se pueden realizar todos los trámites y recibir una atención personalizada, contando con mas de 8 mil Médicos de Cabecera y 17 mil prestadores y 14 mil farmacias adheridas para retirar medicamentos.

En cuanto a accesibilidad, infraestructura y hábitat, se vuelve importante destacar que según la Primera Encuesta Nacional de Personas con discapacidad (2002-2003) en Argentina el 40% de las personas mayores de 75 años salen de su casa excepcionalmente. Este hecho los lleva progresivamente al aislamiento, la soledad y la depresión. La accesibilidad entonces, significa inclusión.

La accesibilidad al medio físico, debe ser entendida como un derecho humano para asegurar la inclusión. Desde esta perspectiva debemos entender la importancia que tienen el conjunto de espacios que habitamos, tanto públicos como privados, en la calidad de vida de los y las personas mayores (SENAF; 2010).

Desde DINAPAM, se busca trabajar en línea con la idea de un sistema progresivo de atención que dé respuesta a las necesidades de las personas mayores según los cuidados que se requieran a lo largo de la vida. Se llevan adelante acciones para el fortalecimiento de las condiciones edilicias y mobiliarias de los establecimientos públicos y organizaciones sin fines de lucro, buscando asegurar un ámbito familiar que beneficie a las personas mayores que participan, concurren o residen en los dispositivos de atención.

Otro objetivo del área es fortalecer la capacidad técnica y de gestión gerontológica de las organizaciones que trabajan con personas mayores, tanto para mejorar sus servicios como las condiciones edilicias y de equipamiento/mobiliario de los diversos dispositivos institucionales.

Con estos propósitos se brindan subsidios para adquisición de equipamiento/mobiliario y refacciones que refuercen los cuidados de las personas mayores, al tiempo que se diseñan espacios de capacitación gerontológica, asesoramiento y gestión en las organizaciones que trabajan con esta población.

A través de acuerdos con organismos gubernamentales y no gubernamentales, se desarrollan las siguientes líneas de acción: Subsidio económico para la adquisición de equipamiento o mobiliario, para los siguientes dispositivos de atención a personas mayores: centros de jubilados y pensionados, viviendas tuteladas, centros/hogares de día y residencias de larga estadía. Subsidio económico para la refacción de los dispositivos de atención a personas mayores, tales como viviendas tuteladas, centros/residencias de día y residencias de larga estadía.

Cuando hablamos de participación en la vida pública y en los procesos de toma de decisiones, se vuelve imprescindible mencionar a El Consejo Federal de los Mayores funciona en la órbita de la DINAPAM (Decreto 457/1997. Resolución 1216/2006).

El Consejo Federal está integrado por personas mayores, sus organizaciones representativas, representantes de los gobiernos provinciales, representantes de organismos nacionales, de las

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional, entre otros. Es un órgano deliberativo que se propone colaborar en la definición y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

Este ámbito deliberativo y de concertación tiene como objetivo institucionalizar la colaboración y participación de las personas mayores, de sus organizaciones representativas y de los gobiernos provinciales en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con este grupo etario, en estrecha colaboración con los organismos del Estado Nacional.

El Consejo Federal de los Mayores está integrado por un representante con rango de director nacional o equivalente por parte de cada uno de los siguientes Ministerios: Economía; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Salud; Educación. Además está conformado por representantes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; de la Administración Nacional de la Seguridad Social; la Agencia Nacional de Discapacidad; la Secretaría de Derechos Humanos; las Comisiones de las Personas Mayores, de Previsión y Seguridad Social, de Acción Social y Salud Pública y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación; y las Comisiones de Salud, de Deporte, de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de la Nación. También son integrantes del Consejo Federal de Mayores representantes de las sociedades científicas de geriatría y gerontología, los responsables del Área de Personas Mayores o cargo equivalente de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, está integrado por los representantes de cada una de las confederaciones de organizaciones de adultos mayores del país, los representantes por provincia de las Federaciones de jubilados y pensionados pertenecientes a los Regímenes Previsionales provinciales no transferidos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Formosa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén y Chaco), los integrantes del Consejo Provincial de cada provincia y la CABA y los representantes de personas mayores de comunidades aborígenes.

Por otro lado, en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) funciona el Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados. Este órgano tiene entre sus

prioridades la institucionalización de formas concretas de participación y consulta de los beneficiarios a través de sus representantes, a fin de expresar sus inquietudes y propuestas, ser parte del control del sistema y recibir la capacitación para su fortalecimiento como sector. Está conformado por representantes de federaciones de jubilados y pensionados de todo el país, constituyéndose en el primer espacio de participación ciudadana en un organismo del Estado. En la actualidad cuenta con 124 miembros titulares y 124 alternos en todo el país. Los representantes son elegidos anualmente por sus entidades. Los representantes se reúnen tres veces por año en reuniones plenarios nacionales con las máximas autoridades de ANSES y su cuerpo gerencial para tratar temas vinculados al sector: los montos de los haberes previsionales, su movilidad, el alcance de algunos beneficios, aciertos, dificultades y/o retrasos en la gestión de todos los trámites que se hacen en el organismo.

Por su parte el INSSJP-PAMI cuenta con ámbitos de intercambio, articulación y diálogo fundamentales: los Consejos Participativos de alcance local, regional y nacional, que posibilitan el encuentro entre las autoridades del instituto y las personas afiliadas a través de sus representantes (Consejeros y Autoridades de Confederaciones, Federaciones y Centros de Jubilados). Estos Consejos se constituyen como ámbitos propicios para el planteo de demandas, problemáticas y sugerencias para el mejoramiento de la política del instituto, promoviendo una gestión participativa y una interacción necesaria para la planificación de acciones institucionales que permitan mejorar la atención brindada y la calidad de los servicios.

El gran desafío institucional remite a la difusión y fomento de este tipo de organismos, a fin de dar continuidad a las instancias de trabajo conjunto, implementando un espacio de participación que permita vincular a sus representantes con las autoridades locales y nacionales de los distintos niveles.

Es posible concluir que la implementación de estas acciones destinadas a la población mayor llevadas a cabo por los distintos organismos nacionales y los actores de la sociedad civil involucrados, han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a fortalecer su rol activo en la comunidad.

Esto le ha permitido a Argentina avanzar en materia de políticas gerontológicas con enfoque de derechos humanos, de acuerdo con los lineamientos y desafíos planteados tanto en el Plan de

Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, como en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En este contexto, Argentina ha promovido un nuevo paradigma en el diseño de las políticas públicas gerontológicas, basado en el enfoque de derechos humanos. Las personas mayores son contempladas como sujetos de derecho y no como objetos de cuidado o asistencia. Este enfoque ha permitido reconocer y promover las capacidades materiales y simbólicas de las personas mayores en su diversidad, incrementando sus niveles de autonomía e independencia.

El fortalecimiento de este paradigma presenta algunos desafíos importantes. La organización de la gestión de las políticas para las personas mayores requiere instalar la perspectiva gerontológica en agendas más amplias al interior del Estado, transversalizando este enfoque a todas las áreas de gobierno. La institucionalidad pública debe contar con mayores profesionales formados en el campo de la gerontología que incorporen esta perspectiva en el diseño de las distintas políticas públicas. También, se debe promover una mayor coordinación entre los organismos encargados de la gestión de las políticas orientadas hacia las personas mayores para generar intervenciones más eficaces y de mayor alcance; y es necesario fortalecer los procesos participativos de la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas, promoviendo mayores espacios de diálogo y de intercambio.

Sin embargo, el proceso de envejecimiento poblacional nos plantea un conjunto de desafíos y acciones a trabajar que pueden sintetizarse en los siguientes puntos principales:

- Desarrollar e implementar un Plan Nacional de Política de Cuidados para Personas Mayores que contemple la dinámica entre el cuidado, el género y las condiciones de vida de la población mayor y garantice el derecho a acceder a un sistema progresivo de atención en cuidados. Este plan deberá contemplar la teleasistencia, el cuidado en el domicilio, en la comunidad, en los centros de día y en las residencias de larga estadía.
- Generar un programa nacional de promoción del buen trato y combate a la violencia hacia las personas mayores.
- Visibilizar en la sociedad la problemática de género y diversidad en las personas mayores.

- Combatir el vejeismo.
- Generar espacios de atención a las violencias de género y diversidad.
- Formación en Derechos Humanos a los profesionales del sistema de salud.
- Formación y capacitación en gerontología destinadas a funcionarios, directivos, profesionales y técnicos de las áreas involucradas en la gestión de servicios sociales, programas y prestaciones destinadas a personas mayores.
- Fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para que esta sea expedita.
- Sancionar el alcance de rango constitucional de la Convención Interamericana que protege los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
- Crear el Defensor de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el ámbito legislativo.

#### **Opciones sobre mejor manera de abordar los vacíos:**

##### **Respuesta**

Primero, en el plano internacional, **consideramos que una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores contribuiría considerablemente a atender las brechas en la protección y promoción de dichos derechos.**

Asimismo, podríamos decir que **la cooperación internacional constituye un aspecto fundamental del diseño e implementación de las políticas gerontológicas** en la Argentina. En este sentido, nuestro país celebró convenios bilaterales con Bélgica, Chile, Colombia, Ecuador, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Perú y el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur con Brasil, Paraguay y Uruguay, en vigencia desde el día 1 de junio de 2005, y reemplaza a los acuerdos bilaterales con Brasil y Uruguay. El gobierno argentino lideró el proceso durante todos los años que duró la negociación (2010-2015), junto con Uruguay, Chile, Brasil y Costa Rica. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social ejerció la presidencia de la delegación argentina, a través de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Los

países que hasta el 2023 han ratificado la Convención son 11 (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Suriname y Uruguay), ya se encuentra en condiciones de funcionar el comité de seguimiento de la OEA.

Además, **nuestro país participó con un rol activo en el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el seno de la OEA desde 2004.**

El 15 de junio de 2015 (Día Mundial de toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez), la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDPM), primer instrumento internacional de carácter vinculante orientado a la protección específica de los derechos de las personas mayores.

Asimismo, desde el 1° de agosto de 2016 se encuentra en vigencia para la República Argentina el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que incluye a Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

En esta misma línea, **la República Argentina participa de distintas instancias de articulación internacional, como instituciones de carácter regional y mundial como espacios de discusión internacional (seminarios, congresos, conferencias, entre otros).**

Nuestro país es miembro del **“Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región”**, el cual es un programa de cooperación intergubernamental aprobado por la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Asunción (Paraguay) en 2011 y cuya unidad técnica ha sido asumida por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

El programa busca profundizar en el conocimiento de la situación de los adultos mayores en Iberoamérica, analizar las políticas públicas dirigidas a este colectivo en la región y fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.

Asimismo, participa de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC), cuyo objetivo **es favorecer el desarrollo de las políticas integrales para las personas mayores y las personas con discapacidad en los países iberoamericanos, mediante la**

**cooperación y el intercambio de experiencias entre los propios países, con la participación de grupos de acción regional y Organismos Internacionales.**

La Argentina como Estado Parte del MERCOSUR integra la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH). La RAADH es una instancia especializada, creada en 2004 por Decisión 40/04 del Consejo del Mercado Común (CMC), que reúne a las principales autoridades de las instituciones competentes en el tema para el análisis y definición de políticas públicas en materia de derechos humanos. Una de las comisiones de la RAADH es la de “Personas Mayores”.

Este año en particular, nuestro país como sede y en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del encuentro, en colaboración permanente con el IPPDH y la cancillería argentina. Puntualmente, el encuentro se desarrolló el 10 de mayo 2023 dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ciudad de Buenos Aires.

El presente informe, buscó exponer brevemente los principales avances de la República Argentina en relación a los compromisos asumidos en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento de 2002. El mismo, representa el resultado de un proceso de articulación, participación, e intercambio entre los principales actores involucrados en la construcción de las políticas gerontológicas a nivel nacional.

Para ello, se relevaron y sistematizaron datos que permitieron dar cuenta de la situación de las personas mayores en Argentina y se analizaron los avances legislativos y las acciones implementadas en materia de políticas gerontológicas por parte de distintos organismos e instituciones nacionales.

En el caso de Argentina, la evaluación de estos avances debe encuadrarse en los lineamientos definidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), aprobada y ratificada en el país mediante Ley N°27.360. Este instrumento, de carácter regional, que reconoce a las personas mayores como sujetos de derecho, configura el marco normativo y político desde el cual son formuladas, diseñadas e implementadas las políticas y programas orientadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores. Desde este paradigma, se ha consolidado la institucionalidad pública dirigida a las personas mayores: se crearon instituciones a nivel provincial y municipal y se

fortalecieron los organismos dedicados a la vejez y el envejecimiento a nivel nacional y provincial.

Asimismo, **cabe destacar la importancia del funcionamiento de diferentes ámbitos de participación de la sociedad civil: el Consejo Federal de los Mayores, principal instancia de participación colectiva en la que se debaten las principales necesidades y orientaciones en materia de políticas públicas para la vejez y el envejecimiento con un criterio federal; el Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social; y los Consejos Participativos del INSSJP-PAMI.**

A su vez, **se resaltan los avances en materia previsional y la ampliación de la cobertura de jubilaciones y pensiones, tanto contributivas como no contributiva y aquellos respecto al derecho al acceso a la salud de las personas mayores, especialmente a través del accionar del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, obra social que garantiza la cobertura de salud de gran parte de la población mayor en Argentina.** Por su parte, los avances en materia de políticas de cuidado han sido un aspecto central del abordaje gerontológico en Argentina durante los últimos años: los Servicios de Cuidados para Personas Mayores gestionados tanto por la DINAPAM como por el INSSJP-PAMI se basan en un modelo progresivo de atención que incluye desde los cuidados en la comunidad (como los cuidados en domicilio y dispositivos como centros y clubes de día) hasta los cuidados institucionales, a través de las Residencias de Larga Estadía.

**Por último, se destaca la importancia que en los últimos años han tenido las acciones formativas y de capacitación en gerontología implementadas por los organismos gubernamentales nacionales involucrados como así también por distintas instituciones públicas y privadas, con el objetivo de capacitar a profesionales, técnicos, educadores y la comunidad en general.** En particular, la perspectiva de género y diversidad sexual ha sido desarrollada como un enfoque central en la formulación y ejecución de las políticas hacia las personas mayores.

COURTESY TRANSLATION

**Responses of Argentina to the questionnaire circulated by the Cofacilitators appointed according to Decision 13/1 of the Open Ended Working Group on Ageing**

**I. Responses from the National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners (PAMI)**

**Identification of possible gaps in the protection of the human rights of older persons and how best to address them**

**QUESTIONNAIRE**

**Background**

The Open-ended Working Group on Ageing, in its decision 13/1 adopted at the thirteenth session, requested the co-facilitators to submit proposed intergovernmental negotiated recommendations to be considered at the fourteenth session of the Working Group and to be presented for consideration by the General Assembly, in accordance with resolution 77/190, regarding the existing international framework of the human rights of older persons and possible gaps, and options on how best to address them.

The purpose of this questionnaire is meant to facilitate the consideration of the existing international framework of the human rights of older persons and the identification of possible gaps in the protection of the human rights of older persons and how best to address them.

The questionnaire will be sent to all States Members of the United Nations, observers in the General Assembly, A-status National Human Rights Institutions, non-governmental organizations with ECOSOC Status and previously accredited organizations to the Working Group, as well as United Nations Funds, Programmes, Specialized Agencies and other UN Entities.

**The Questions**

*Identification of gaps*

1. For each of the topics that have been considered by the Open-ended Working Group since its eighth session, please state possible gaps your Government/organization has identified in the normative framework and practical implementation for the protection of the human rights of older persons. (500 words each)

- a) Equality and non-discrimination
- b) Violence, neglect and abuse
- c) Long-term care and palliative care
- d) Autonomy and independence
- e) Protection et sécurité sociales (y compris protection sociale minimale)
- f) Education, training, lifelong learning and capacity-building
- g) Right to Work and Access to the Labour Market
- h) Access to justice
- i) Contribution of Older Persons to Sustainable Development
- j) Economic security
- k) Right to Health and Access to Health Services
- l) Social Inclusion
- m) Accessibility, infrastructure and habitat (transport, housing and access)
- n) Participation in the public life and in decision-making processes

**Response:**

**The Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons (CIDHPM), approved in Argentina in 2017 through Law No. 27,360, acquired constitutional status in November 2022 through Law No. 27,700. It constitutes a legal instrument of a binding nature for the internal legal system of our country, providing a specific protection framework for the human rights of older persons, and compelling the State to implement public policies that guarantee the full enjoyment and exercise of the principles, duties and protected rights established therein, which include all the topics examined by the Open-ended Working Group.**

**However, there is little domestic legislation that specifically regulates the issues that have been examined by the Open-ended Working Group, which represents possible gaps.**

**Nevertheless, it is worth mentioning in relation to domestic legislation that the Argentine Congress is currently debating a Bill for “Promotion of good treatment and comprehensive protection to prevent, punish and eradicate violence against older persons” (Files No. S-2099/22 and No. S-2224/23), which aims to ensure the defense and promotion of rights and eradicate any practice that constitutes violence towards older persons, aged 60 or over, in the terms and conditions established in the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons.**

**In this way, the bill has, among other purposes: a) promote good treatment of older persons in all public spheres; b) eliminate all forms of discrimination, in all areas of life, that undermine the rights of older persons, regardless of their race, ethnicity, sex, gender, sexual orientation, culture, religion and/or psychophysical abilities; c) promote the right of older persons to live a life free of violence; d) raise awareness, prevent, punish and eradicate violence against older persons in any of its areas; e) develop transversal public policies on violence against older persons; f) remove sociocultural patterns that promote and sustain power relations over older persons, prejudices and negative stereotypes about them; g) stimulate the empowerment of older persons; h) address the isolation of older persons by promoting intergenerational activities; i) eliminate the overlap of interventions and streamline the procedures necessary for efficient access to justice, in order to avoid re-victimization; j) mitigate the damage derived from violence exerted on older persons; and k) promote the eradication of physical**

restraints for older persons in all areas where they are assisted, whether permanently or temporarily, public or private.

In this framework, it is important to highlight that the National Government must promote and inter-institutionally strengthen the different jurisdictions for the creation and implementation of comprehensive assistance services for older persons who suffer from violence and the people who perpetrate them, and must commit to the implementation of some of the actions, such as:

- a) Generation of dissemination campaigns that aim to eradicate negative stereotypes regarding ageing and make the community aware of the rights of older persons;
- b) Implementation of a single, free and accessible telephone line throughout the country, intended for containment, information and advice on existing resources regarding the prevention of violence against older persons and assistance to those who suffer from it;
- c) Creation of units specialized in violence at the first level of care that work on the prevention and assistance of acts of violence, and that coordinate their activities according to the established standards, protocols and records and that have a comprehensive approach to the following activities;
- d) Implementation of economic assistance programs for the self-reliance of older persons;
- e) Development of day centers for the comprehensive strengthening of older persons;
- f) Creation of transit instances for the care and shelter of older persons who suffer from violence in cases where remaining in their home or residence implies an imminent threat to their physical, psychological or sexual integrity, and must be oriented towards immediate reintegration to the family, residential, social and work nucleus;
- g) Implementation of re-education programs aimed at people who exercise violence against older persons.

#### *Options 1 Options on how best to address the gaps*

1. Please state how your Government/organization has engaged with international and regional human rights mechanisms (for example: universal periodic review (UPR) treaty bodies, special procedures, regional mechanisms), specifically with regard to older persons. (500 words)

#### **Response:**

The National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners (PAMI) participated through its Secretariat General of Human Rights, Community Gerontology, Gender and Care Policies, in various international and regional bodies that work on the protection of human rights for older persons. In this context, it is worth highlighting the participation in the 11th session of the Open-Ended Working Group on Aging, held in 2021, which was organized by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Among other topics, in this session it was addressed the issue of the Human Rights of older persons in the context of the pandemic, as well as access to justice for older persons. In such a context,

the relevance of strengthening the work towards the elaboration of a Universal Convention on the Human Rights of Older Persons was highlighted.

Likewise, there was a participation in the 12th session of the Open-Ended Working Group on Aging, held in 2022, which reinforced the need to have a binding international instrument aimed at protecting the human rights of older persons. In this context, the problem of age discrimination was addressed, as well as the violation of the rights of older persons due to the poverty they suffer as well as the lack or lack of social protection in many countries of the world, which increased significantly in the context of the pandemic.

Finally, it is worth highlighting the participation of PAMI as a guest in various instances held within the framework of the Meeting of High Authorities on Human Rights in Mercosur (RAADDHH), in pursuit of joint work to achieve the development and consolidation of the agenda care systems. In this sense, there was a collaboration to a proposal for a recommendation from the Common Market Council (of MERCOSUR) aimed at the States Parties promoting an agenda on policies and programs for the promotion, protection and restitution of the Human Rights of older persons, understood as full and active subjects of their rights, in accordance with the guidelines of the Inter-American Convention for the Protection of the Human Rights of Older Persons.

2. Have those engagement resulted in positive impact in strengthening the protection of the human rights of older persons? Please elaborate. (500 words=

**Response:**

At the outset, it should be noted that the National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners (PAMI) has the character of a legal entity of non-state public law, with financial and administrative individuality, with the power to grant comprehensive, integrated and equitable health and social benefits, aimed at the promotion, prevention, protection, recovery and rehabilitation of health.

PAMI represents the largest social work in Latin America, has more than 4.5 million senior affiliated, and implements the Comprehensive Medical Assistance Program, which includes the aforementioned benefits.

In this context, the participation of PAMI in the aforementioned instances represents a positive impact, not only in strengthening the protection of the human rights of older persons, but also in the consolidation of inter-institutional relations.

3. What other options can be considered to strengthen the protection of older persons? Please elaborate. (500 words)

**Response:**

In February 2020, the General Secretariat of Human Rights, Community Gerontology, Gender and Care Policies was created within PAMI, with the objective of formulating, designing and executing policies and programs based on compliance with the Inter-American Convention on the Protection of the

**Human Rights of Older Persons and the United Nations 2030 Agenda, which undoubtedly reinforces the protection of this population.**

**In this sense, the Secretariat promotes regulations on the protection of the Human Rights of older persons; establishes protocols that promote good treatment and combat mistreatment of older persons; promotes a care policy from the least complex levels (community care) to the most complex (institutional care); designs and executes psychosocial care and cognitive impairment care, such as Alzheimer's and other dementia programs for older persons; promotes the health, autonomy and social participation of older persons; formulates and executes programs with a gender perspective and sexual diversity in older persons, transversal to all the PAMI's programs; plans, executes and evaluates specific lines of action for the promotion, protection, social integration and development of older persons; generates and carries out training programs and actions in community gerontology, gender, sexual diversity, human rights, long-term care, good treatment, among others, for human resources who work with older persons; and promotes awareness campaigns about the positive image of old age, breaking myths and stereotypes.**

4. If applicable, what is your assessment on the protection of the human rights of older persons according to regional and international instruments? (500 words)

**Response:**

**The approval of the Inter-American Convention on the protection of the human rights of older persons by Law 27,360, and the subsequent granting of constitutional hierarchy to this Human Rights Treaty by Law 27,700, currently constitutes the culmination of an entire complex movement of making older persons visible as subjects of rights and seeking greater protection of their rights, as well as it is an instrument that represents the starting point of a process of regulatory and institutional reforms aimed at impacting the real lives of older persons.**

**In this framework, and without prejudice to having this fundamental instrument for Argentina, it is considered essential to generate new internal regulatory instruments that specifically regulate the implementation of the established principles and rights, as well as generate spaces for awareness, promotion and dissemination aimed at the entire society with the purpose of consolidating the protection of the human rights of older persons.**

**Also, at the global level, since the international legal framework provides fragmented and inconsistent coverage of the human rights of older persons, Argentina considers that it is necessary to adopt an international convention on the human rights of older persons.**

### **Deadline**

Deadline to send responses to the questionnaire is 24 November 2023. All inputs will be posted online.

Submissions to be sent to Stefano Guerra [stefano.guerra@mne.pt](mailto:stefano.guerra@mne.pt) and Pedro Paranhos [pedro.paranhos@itamaraty.gov.br](mailto:pedro.paranhos@itamaraty.gov.br) with copy to [ageing@un.org](mailto:ageing@un.org)

## II. Responses from the National Directorate of Policies for Older Adults (DINAPAM)

### **Questionnaire: identification of possible gaps in the protection of the human rights of older persons and how to address them**

---

For several decades, the Argentine Republic has been going through a process of population aging and currently represents one of the oldest countries in the region. According to the last population census carried out, in 2022 the population of 60 years old and over amounts to 15.7% of the total population, almost 7.1 million people. Of the total, 18.4% are women aged 60 and over, while for men this is 14.6% (INDEC, 2022).

The demographic increase in the elderly population worldwide (between 2015 and 2030 the population aged 60 and over will rise from 900 million to more than 1.4 billion people) is not alien to the Argentine reality.

With the adoption in 2015 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, older persons were incorporated into some of the achievements foreseen in that instrument.

This circumstance marked a responsibility for Argentina to work on the application of public policies aimed at achieving the fundamental rights of older persons provided for in the Inter-American Convention for the Protection of the Human Rights of Older Persons and their direct participation in the society, to meet the objectives set out in the 2030 agenda.

Currently in our country there are several institutions that are in charge of the issue of old age and aging. Her son:

1. Ministry of Social Development through its National Directorate of Policies for Older persons.
2. Ministry of Health, with its Directorate of Adults and Seniors.
3. The National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners (PAMI).
4. The National Social Security Administration (ANSES).
5. The Secretariat of Human Rights.

In relation to the different questions of the questionnaire “Identification of possible gaps in the protection of the human rights of older persons and how to address them” requested by the Open-ended Working Group on Aging, it becomes important to highlight that Argentina ratified, in 2017, through Law No. 27,360, the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons (hereinafter CIPDHPM) (vested with supra-legal character) adopted by the Organization of American States during the 45th Assembly General, on June 15, 2015, thus recognizing older persons as subjects of law and assets within society.

In particular art. 31 of the Convention establish the requirements, guarantees and obligations of the countries for adequate access to justice for older persons.

The National Constitution of the Argentine Republic, through article 75 inc. 22, grants constitutional hierarchy to a series of Human Rights treaties, which oblige the different branches of the Government to adopt measures that implement the provisions of the inter-American regulations, as well as the jurisdictional acts of the Argentine courts must be in accordance with the provisions of the international legislation imposed in the treaties ratified by our country.

The convention becomes an essential tool to guarantee access to the rights of older persons. Among these rights, the value, participation and protagonism in their communities stand out; as well as dignity, non-discrimination, independence and respect for their autonomy. This normative framework of constitutional hierarchy becomes fundamental to set the course of gerontological actions and policies from the rights approach.

By achieving this constitutional hierarchy, the rights of older persons are in parity with those of other groups in vulnerable situations that are identified and protected in international documents that achieved equal status, such as the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, among others.

Despite this, in our country there is still no national legislation that specifically guarantees equality for older persons, nor is there legislation that explicitly prohibits discrimination based on age. Perhaps this is one of the great gaps in the protection of the human rights of older persons and the challenge that confronts us in coming years.

However, in recent years, public institutions aimed at older persons have been consolidated to provide the mechanisms, instruments and resources to ensure the effectiveness of rights.

Particularly, the National Directorate of Policies for Older persons (DINAPAM) is in charge of the design and implementation of policies and actions aimed at the protection, promotion and defense of the human rights of the country's older persons. Its objective is to design and execute programs for the promotion, protection and social integration of older persons. Its guidelines are grouped into different areas, in each of which actions are carried out from a comprehensive perspective and a rights-based approach.

The public policies implemented by the Directorate are framed in axes that aim at family strengthening and gender and human rights policies. Based on this, the Management proposes:

- Generate initiatives and actions aimed at good treatment, full enjoyment of rights and active aging with a gender perspective.
- Expand the progressive system of care for the elderly.
- Strengthen inter-institutional coordination with other national, provincial, municipal organizations and civil society organizations.

- Promote and disseminate gerontological knowledge at the national, provincial, municipal level and with non-governmental organizations.

- Develop sociocultural projects in which older persons are protagonists.

Likewise, the Directorate is responsible for the operation of the Federal Council of Older Persons, which brings together and articulates the implementation of policies for the sector.

Since 2012, DINAPAM, of the Ministry of Social Development, and more recently from the National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners (PAMI), a program has been developing on the National “Good Treatment” Program for older persons, with national campaigns aimed at raise awareness in the community about this issue and dismantle the myths and prejudices socially constructed about old age.

The “National Campaign to Promote Good Treatment of Older persons” is carried out once a year and seeks to raise awareness and sensitization through actions that promote good treatment of older persons throughout the country, which encourage a positive and empowering perspective on older persons.

Some of the general objectives are to promote the culture of Good Treatment towards older persons, as subjects with full rights, attending to interpersonal relationships and the links they maintain with the physical, social and cultural environment, raising awareness in society, in general, and the media about the importance of good treatment towards older persons, providing information and training about rights in old age; recognize older persons as active subjects with potential to develop, empower and promote their material and symbolic capacities and contribute to eradicating social prejudices, myths, images and words that make up negative stereotypes about older persons, building and promoting a positive image of old age and aging.

In 2019, the Ministry of Women, Gender and Diversity was established in response to the commitment assumed to guarantee the rights of women and diversities, against all forms of discrimination and violence, and in pursuit of the construction of a more egalitarian society that promotes the integral autonomy of all people. Among its functions, the Ministry is responsible for coordinating actions with actors from the public and private sectors and civil society organizations on gender, equality and diversity policies; and participates in the design and implementation of education and training policies on gender, equality and diversity. The Covid-19 health emergency made visible the centrality of care in our lives, in society and the economy. It is then that the Ministry of Women, Gender and Diversity promoted the formation of “The Interministerial Care Policies Table”, which brings together 15 organizations of the National Executive Branch in order to debate and plan policies that contribute to a fairer social organization of care, that achieves a better family and social redistribution of the task, as well as better redistribution between genders, and that contributes to recognizing care as a need, as a job and as a right.

In this same line of action, the INSSJP-PAMI created the Sub-Management of Gender, Sexual Diversity and Dissidence Policies: this area aims to formulate, design and execute policies and programs that combat discrimination based on gender, sexual diversity or identity, and implement relevant projects, benefits and services for promotion, prevention and assistance with a Human Rights and gender perspective approach.

Along these lines, the gender perspective is in force in all lines of action that make up DINAPAM's progressive care system. It is present both in the contents of the training and in the holding of sessions for technical teams, professionals and caregivers where aspects of both gender and the approach to sexualities in comprehensive care contexts are addressed. In particular, the training manual of the National Home Caregiver Program contains a transversal gender perspective that is specifically reflected in the chapter on gender and diversity.

Furthermore, within the National Institute against Discrimination, Xenophobia and Racism (INADI), there is an Assistance Line for Victims of Discrimination, Racism and Xenophobia to file complaints and queries.

Regarding point c) of the questionnaire, we could point out that there is currently no national legal framework that requires training for long-term care outside the CIPDHPM. However, as previously noted, gerontological training is considered a strategic line of action of the National Directorate of Policies for Older persons. For this reason, we have an area dedicated to the training of human resources for home care with a perspective of comprehensive protection of rights, and, on the other, prioritize the role of home caregivers, through the professionalization of their task by promoting formal sources of work. All of this in pursuit of improving the quality of life of older persons by providing responses consistent with their care needs. The "community care" area dependent on DINAPAM, aims to promote progressive care systems, training specialized human resources for home, community and institutional care of older persons.

At this point, it becomes important to highlight that the National Directorate has a National Registry of Home Caregivers. It is a web device that works through the page <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/registrocuidadores>, through which information about people who provide their service as home caregivers for of older persons throughout the country, and who have accredited training to perform that role, with the ultimate goal of facilitating the link and articulation between the different agents and families or users.

In order to respond to the needs of the community, agreements are established with governmental and non-governmental organizations for the following lines of action:

- Training course for home caregivers
- Refresher course for home caregivers
- Training course in cognitive impairment, Alzheimer's and other dementias for home caregivers

- Training course in personal autonomy and universal accessibility for home caregivers
- Palliative care training course for home caregivers of elderly people

Particularly, we have Palliative Care Training, which is aimed at home caregivers who are interested in acquiring specific tools and knowledge that allow them to respond to the needs of older persons experiencing a chronic illness in the terminal stage.

Palliative Medicine is recognized as a specialty based on Resolution 1814/2015 of the Ministry of Health.

The Mandatory Medical Program (PMO), which establishes the benefits that must be provided, at a minimum, by the National Social Works and prepaid medicine companies, includes palliative care based on Resolution 201/2002 of the Ministry of Health of the Nation, which establishes in the paragraph referring to the topic:

*“8.1. Palliative care is the active and total assistance of patients by a multidisciplinary team, when the patient's life expectancy does not exceed 6 months, due to not responding to the curative treatment that was implemented. The objectives here will be to relieve pain, symptoms and the psychosocial approach of the patient. The coverage will be given based on the general framework established by the PMO, that is, the Agents of Regulatory Update No. 1/2002 - S.S.SALUD 5 Insurance that are obliged to provide the benefits mentioned in Annexes II and III with 100 % coverage.”*

That is, both the Social Works of the national system (those included within Laws 23,660 and 23,661, usually known as “national social works” or “union social works”) and prepaid medicine companies must finance palliative care benefits.

On the other hand, law 26529 on Patient Rights in their Relationship with Health Professionals and Institutions (modified by law 26,742) establishes in article 5, point H, *“the right to receive comprehensive palliative care in the process of care for your illness or condition.”* Its regulatory decree defines palliative care as *“the multidisciplinary care of the terminally ill patient aimed at guaranteeing hygiene and comfort, including pharmacological or other procedures to control pain and suffering.”*

Furthermore, within the framework of the National Cancer Institute of the Ministry of Health, the National Palliative Care Program is implemented (resolution 1253-E/2016 of the Ministry of Health of the Nation) whose objectives are, on the one hand, the promotion of care continuous and integrated treatment of all cancer patients throughout their illness, placing special emphasis on preventing suffering and improving their quality of life and that of their families. And in turn, achieving pain relief and access to opioid medication is an effective reality for all patients in the country, eliminating accessibility barriers for these medications.

In recent years, public institutions aimed at older persons have been consolidated to provide the mechanisms, instruments and resources to ensure the effectiveness of rights. In this sense,

institutions were created at the provincial and municipal levels to provide local responses to older persons. On the other hand, organizations dedicated to old age and aging were strengthened at the national level, with 92% of provincial public institutions having their own organizations aimed at older persons.

The majority of these organizations have provincial leadership status, which constitutes an achievement in strengthening institutionality. These directorates launched a wide variety of programs to meet the needs of older persons and also to promote their autonomy and participation.

Likewise, in the provinces, Provincial Councils for the Elderly have been developed in which the main needs and guidelines regarding public policies for old age and aging are debated with a federal criterion.

As we mentioned previously, in terms of legislative advances, through Law No. 27360, a new positive paradigm was established around old age and assumed the commitment to implement public policies that specify the rights contemplated therein. The CIPDHPM defines principles such as the promotion and defense of the human rights and fundamental freedoms of the elderly, the valorization of the elderly, their role in society and contribution to the development, the dignity, independence, protagonism and autonomy of the elderly, the equality and non-discrimination, among others. The relevance of this instrument lies in the recognition of older persons as subjects of law, laying the foundations for the legislation of the countries and their public policies to advance towards concrete actions that allow older persons to function in a society that respects their rights. .

The National Directorate of Policies for Older persons seeks to implement courses, workshops and training throughout the country so that older persons have the possibility of participating in activities that optimize their opportunities for physical, mental and social well-being. For this, DINAPAM has the Area of education, culture and community communication.

The area has the purpose of promoting spaces for the promotion of rights, promoting sociocultural, educational and community communication projects for the participation of older persons. The “Experience Counts” project seeks to recover the knowledge and skills of older persons to make them available to their community. It consists of the transmission of traditional jobs by older persons to younger persons. Apprentices have the opportunity to improve their chances of accessing the labor market by acquiring knowledge and/or skills that are not available in the formal educational offer, while older persons fulfill the role of trainers.

The “Well Active” project aims to guarantee access to physical and recreational activity for older persons who do not have the possibility to participate in these spaces – for socioeconomic or cultural reasons – or those who have not incorporated these types of habits. The project emphasizes the physical well-being, health and food security of older persons, to promote active aging.

In relation to the point related to the right to work and the labor market, although there are no specific measures for the participation or reintegration of older workers into the labor market, the Ministry of Labor, Employment and Social Security of the Nation implements various employment programs and training for the benefit of older persons. They establish as the only condition that the older person is unemployed, and that they do not receive a retirement or pension.

These include: Labor Insertion Program (PIL): its objective is to promote the labor insertion of workers with greater employability difficulties, providing companies that hire them with financial aid from the Ministry of Labor, Employment and Social Security that covers part of your salary.

On the other hand, the Work Training Actions Program (ETP): provides economic incentives to companies to hire apprentices in the positions they need. They then have the possibility of incorporating those already trained apprentices. The general objective of the Program is to improve the employability conditions of unemployed workers and contribute to strengthening the productivity and competitiveness of companies through the possibility of training trained people according to their needs.

Now, in terms of access to justice, aging can also become a cause of vulnerability for the exercise of rights in the administration system. In the judicial system, the elderly person may face several difficulties such as travel difficulties due to physical restrictions or for reasons of economic dependency. Likewise, the use of excessively technical and incomprehensible language, together with invisibility, negligence and mistreatment, contribute to reaffirming their vulnerability, hindering the full exercise of their rights and legal capacity (PAMI: 2023).

Added to the digital divide and the progressive digitalization of legal procedures, which was further deepened by the COVID-19 pandemic, they hinder the right of access to justice, which is configured as a guarantee of the right to equality, in the a measure that means that States must ensure that all citizens have equal opportunities and make their right effective, without suffering any discrimination.

In Argentina, access to justice for older persons is found in article 31 of the CIDHPM. It is the only legal norm in force at the international level that describes that access specifically for this population group. In this context, it becomes a primary need to work on awareness, training, accessibility, availability and effective resources to solve these problems that older persons specifically suffer.

In 2008, the Office for the Promotion and Protection of the Human Rights of Older persons was created within the Ministry of Justice, Security and Human Rights of Argentina, which promotes policies, disseminates information, trains and seeks to raise awareness about the human rights of older persons. Within this framework, the Office responds to queries from the beneficiary population related to situations of psychological and economic abuse and mistreatment, or to advice on the resolution of access to economic, social and cultural rights. In this framework, the

Office responds to queries from the beneficiary population related to situations of psychological and economic abuse and mistreatment, or to advice on the resolution of access to economic, social and cultural rights.

In addition, institutions were systematically created at the provincial and municipal level to provide local responses to older persons and organizations dedicated to old age and aging were strengthened at the national level, with 92% of provincial public institutions having their own organizations oriented towards older persons.

Participation in the labor market is reduced in older age groups, which is why it is essential that this population group has social security regimes and support networks.

Currently, it reaches 89.1% of older persons. This means 9 out of 10 women and men of retirement age. That is, almost all older persons residing in Argentina have a contributory or non-contributory retirement and/or pension, thanks to which they are guaranteed an income and access to medical coverage in accordance with the pension system. At this point, it is important to highlight that pension coverage in Argentina is one of the highest in the region and is essential for financing old-age care services.

When we refer to public policies adopted in terms of economic security for older persons, we can highlight that in 2008 the private capitalization system (AFJP) was eliminated, creating as a consequence the Argentine Comprehensive Pension System, in this way the National State sought to expand and improve social security coverage for older persons.

More recently, among the most important measures, the implementation of pension moratoriums stands out, which allowed the inclusion through retirement of older persons who had worked, but to whom contributions had not been made, a policy that mainly favored women. Since 2016, the Universal Pension was created for People over 65 (PUAM) who have not made all the contributions to the pension system through the Historical Reparation Law for Retirees and Pensioners No. 27,260, which establishes, In addition to the regularization of pension judgments and the updating of salaries for retirees and pensioners, the Universal Pension for the Elderly.

In June 2021, a central policy was launched to ensure the universality of women's right to retire, contributing to repairing the gap in access to social security that has harmed women with children. Time to reach retirement benefits: the recognition of contributions for care tasks. This measure, aimed at those women with daughters or sons who, having reached retirement age, lack the required years of contributions, seeks to make visible and repair a historical and structural inequality in the distribution of care tasks, in order to recognize and value the time that women have dedicated to raising their daughters and sons.

Likewise, in 2020, the National Social Security Administration, within the framework of the health and economic emergency, relaunched the Personal Credit Program for holders of retirements, pensions and allowances for daughters and sons. Among the measures that ANSES

implemented at the beginning of the pandemic, extraordinary bonuses were given to retirees to allow them to face economic difficulties, and the retirement formula was subsequently modified so that the income received compensated for inflation. On the other hand, the non-taxable minimum of Income Taxes was increased, which exempted retired people who earn up to 8 minimum retirements.

In addition, in 2020, a policy of free medicines was launched for members, to which more than 3.5 million people had access. The measure allows members to save an average of \$18,922 per month. Within the framework of the COVID-19 pandemic, electronic prescription and telemedicine were implemented, intensive care beds were expanded, two new hospitals and 4 Covid centers were created. In addition, it has the Cared Residences program in place where special and personalized attention is provided to people who live in long-stay residences (RLE).

When we refer to the right to health, it is important to point out that currently, affiliation to health coverage is practically universal in the population of retirement age: the Comprehensive Medical Care Program (PAMI) is a specific social work for older persons and includes those aged 70 and over without retirement.

The National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners, better known as PAMI, was created in 1971 with the objective of providing comprehensive medical assistance to older persons. PAMI is the largest social work in Latin America. We accompany 5 million retirees and their dependents, pensioners and veterans of the Malvinas. The Comprehensive Medical Assistance Program includes medical and social benefits, because an active life is key to enjoying good health with more than 600 Care Agencies and 38 Local Management Units, where you can carry out all the procedures and receive personalized attention, with more than 8 thousand General Practitioners and 17 thousand providers and 14 thousand pharmacies participating to pick up medications.

In terms of accessibility, infrastructure and habitat, it is important to highlight that according to the First National Survey of People with Disabilities (2002-2003) in Argentina, 40% of people over 75 years of age leave their home exceptionally. This fact progressively leads them to isolation, loneliness and depression. Accessibility, then, means inclusion.

Accessibility to the physical environment must be understood as a human right to ensure inclusion. From this perspective we must understand the importance of the set of spaces we inhabit, both public and private, in the quality of life of older persons (SENAF; 2010).

At DINAPAM, we seek to work in line with the idea of a progressive care system that responds to the needs of older persons according to the care required throughout life. Actions are carried out to strengthen the building and furniture conditions of public establishments and non-profit organizations, seeking to ensure a family environment that benefits older persons who participate, attend or reside in care facilities.

Another objective of the area is to strengthen the technical and gerontological management capacity of organizations that work with older persons, both to improve their services and the building conditions and equipment/furniture of the various institutional devices.

For these purposes, subsidies are provided for the acquisition of equipment/furniture and spare parts that reinforce the care of the elderly, while spaces for gerontological training, advice and management are designed in organizations that work with this population.

Through agreements with governmental and non-governmental organizations, the following lines of action are developed: Economic subsidy for the acquisition of equipment or furniture, for the following care devices for the elderly: centers for retirees and pensioners, sheltered housing, centers/ day homes and long-stay residences. Financial subsidy for the replacement of care devices for the elderly, such as sheltered housing, day centers/residences and long-stay residences.

When we talk about participation in public life and in the decision-making process, it becomes essential to mention The Federal Council of the Elderly operates within the orbit of DINAPAM (Decree 457/1997. Resolution 1216/2006).

The Federal Council is made up of older persons, their representative organizations, representatives of provincial governments, representatives of national organizations, the Chambers of Representatives and Senators of the National Congress, among others. It is a deliberative body that aims to collaborate in the definition and monitoring of public policies aimed at older persons.

This deliberative and consultation area aims to institutionalize the collaboration and participation of older persons, their representative organizations and provincial governments in the definition, application and monitoring of public policies related to this age group, in close collaboration with the National State agencies.

The Federal Council of the Elderly is made up of a representative with the rank of national director or equivalent from each of the following Ministries: Economy; Work, Employment and Social Security; Health; Education. It is also made up of representatives of the National Institute of Social Services for Retirees and Pensioners; from the National Social Security Administration; the National Disability Agency; the Secretariat of Human Rights; the Commissions for the Elderly, for Welfare and Social Security, for Social Action and Public Health, and for Population and Human Development of the Chamber of Deputies of the Nation; and the Health, Sports, Labor and Social Welfare and Population and Human Development Commissions of the Chamber of Senators of the Nation. They are also members of the Federal Council of Seniors, representatives of the scientific societies of geriatrics and gerontology, those responsible for the Senior Citizens Area or equivalent position of each of the provinces and the Autonomous City of Buenos Aires. In addition, it is made up of the representatives of each of the confederations of senior citizens' organizations in the country, the representatives by province of the Federations of retirees and pensioners belonging to the provincial Social Security Regimes not transferred to

the Integrated Retirement and Pension System (Formosa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén and Chaco), the members of the Provincial Council of each province and the City of Buenos Aires and the representatives of older persons from Indigenous People.

On the other hand, within the scope of the National Social Security Administration (ANSES), the Advisory Body for Retirees and Pensioners operates. This body has among its priorities the institutionalization of concrete forms of participation and consultation of the beneficiaries through their representatives, in order to express their concerns and proposals, be part of the control of the system and receive training to strengthen it as a sector. It is made up of representatives of federations of retirees and pensioners from all over the country, becoming the first space for citizen participation in a State organization. It currently has 124 regular members and 124 alternate members throughout the country. Representatives are elected annually by their entities. The representatives meet three times a year in national plenary meetings with the highest authorities of ANSES and its management body to discuss issues related to the sector: the amounts of pension benefits, their mobility, the scope of some benefits, successes, difficulties and/or or delays in the management of all the procedures carried out in the organization.

The INSSJP-PAMI has fundamental areas of exchange, articulation and dialogue: the Participatory Councils of local, regional and national scope, which enable the meeting between the authorities of the institute and the affiliated people through their representatives (Counselors and Authorities of Confederations, Federations and Retirement Centers). These Councils are constituted as adequate environments for raising demands, problems and suggestions for the improvement of the institute's policy, promoting participatory management and a necessary interaction for the planning of institutional actions that allow improving the care provided and the quality of the services.

The great institutional challenge refers to the dissemination and promotion of this type of organizations, in order to provide continuity to the instances of joint work, implementing a space for participation that allows linking their representatives with local and national authorities at different levels.

It is possible to conclude that the implementation of these actions aimed at the elderly population carried out by the different national organizations and the civil society actors involved, have contributed to improving the quality of life of the elderly and strengthening their active role in the community.

This has allowed Argentina to advance in terms of gerontological policies with a human rights focus, in accordance with the guidelines and challenges posed both in the Madrid International Plan of Action on Aging and in the Inter-American Convention on the Protection of Human Rights Humans of Older Persons.

In this context, Argentina has promoted a new paradigm in the design of gerontological public policies, based on the human rights approach. Older persons are considered as subjects of law and not as objects of care or assistance. This approach has made it possible to recognize and promote the material and symbolic capabilities of older persons in their diversity, increasing their levels of autonomy and independence.

Strengthening this paradigm presents some important challenges. The organization of policy management for older persons requires installing the gerontological perspective in broader agendas within the State, mainstreaming this approach to all areas of government. Public institutions must have more professionals trained in the field of gerontology who incorporate this perspective in the design of different public policies. Also, greater coordination must be promoted between the organizations in charge of managing policies aimed at older persons to generate more effective and broader-reaching interventions; and it is necessary to strengthen the participatory processes of civil society in the construction of public policies, promoting greater spaces of dialogue and exchange.

However, the process of population aging presents a set of challenges and actions to work on that can be summarized in the following main points:

- Develop and implement a National Care Policy Plan for Older Persons that contemplates the dynamics between care, gender and the living conditions of the elderly population and guarantees the right to access a progressive care system. This plan must contemplate telecare, care at home, in the community, in day centers and in long-stay residences.
- Generate a national program to promote good treatment and combat violence towards older persons.
- Make the gender and diversity problems in older persons visible in society.
- Fight ageism.
- Generate spaces for attention to gender violence and diversity.
- Training in Human Rights for professionals in the health system.
- Training and capacity building in gerontology for officials, managers, professionals and technicians in the areas involved in the management of social services, programs and benefits for older persons.
- Strengthen the mechanisms for access to justice so that it is expeditious.
- Sanction the constitutional scope of the Inter-American Convention that protects the Human Rights of Older Persons.
- Create the Ombudsman for the Human Rights of Older Persons in the legislative field.

Options on best way to address the gaps:

First, at the international level, **we consider that an international convention on the human rights of older persons would contribute considerably to addressing the gaps in the protection and promotion of their human rights.**

Also, **we could say that international cooperation constitutes a fundamental aspect of the design and implementation of gerontological policies in Argentina.** In this sense, our country entered into bilateral agreements with Belgium, Chile, Colombia, Ecuador, Slovenia, Spain, France, Greece, Italy, Luxembourg, Portugal, Peru and the Mercosur Multilateral Social Security Agreement with Brazil, Paraguay and Uruguay, in effective as of June 1, 2005, and replaces the bilateral agreements with Brazil and Uruguay. The Argentine government led the process during all the years that the negotiation lasted (2010-2015), together with Uruguay, Chile, Brazil and Costa Rica. In this context, the Ministry of Social Development held the presidency of the Argentine delegation, through the National Directorate of Policies for Older persons dependent on the National Secretariat for Children, Adolescence and Family. The countries that have ratified the Convention by 2023 are 11 (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Mexico, Peru, Suriname and Uruguay), the monitoring committee of the OAS is now in a position to operate.

Furthermore, **our country participated with an active role in the Working Group in charge of preparing the draft Inter-American Convention for the Protection of the Human Rights of Older Persons at the OAS since 2004.**

On June 15, 2015 (World Day of Awareness against Abuse and Maltreatment in Old Age), the OAS General Assembly adopted the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons (CIPDPM), the first legally binding instrument aimed at the specific protection of the rights of older persons.

Likewise, since August 1, 2016, the Multilateral Ibero-American Social Security Agreement has been in force for the Argentina, which includes Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, El Salvador, Spain, Paraguay, Peru, Portugal, the Dominican Republic and Uruguay.

In this same line, **Argentina participates in different instances of international coordination, such as regional and global institutions as spaces for international discussion (seminars, congresses, conferences, among others).**

Our country is a member of the “Ibero-American Cooperation Program on the Situation of Older persons in the Region”, which is an intergovernmental cooperation program approved by the XXI Ibero-American Summit of Heads of State and Government held in Asunción (Paraguay) in 2011 and whose technical unit has been assumed by the Ibero-American Social Security Organization (OISS).

**The program seeks to deepen the knowledge of the situation of older persons in Latin America, analyze public policies aimed at this group in the region and promote the exchange**

**of experiences and good practices between countries, with the ultimate objective of improving the quality of life of our elderly.**

Likewise, it participates in the Ibero-American Intergovernmental Network for Technical Cooperation (RIICOTEC), whose objective is to promote the development of comprehensive policies for older persons and people with disabilities in Ibero-American countries, through cooperation and the exchange of experiences among countries, with the participation of regional action groups and International Organizations.

Argentina, as a State Party to MERCOSUR, is a member of the Meeting of High Authorities on Human Rights (RAADH). The RAADH is a specialized body, created in 2004 by Decision 40/04 of the Common Market Council (CMC), which brings together the main authorities of the institutions competent in the subject for the analysis and definition of public policies on human rights. One of the commissions of the RAADH is that of "Older persons".

This year, in particular, our country hosts and in exercises the Pro Tempore Presidency of the meeting, in permanent collaboration with the IPPDH and the Argentine Foreign Ministry. Specifically, the meeting took place on May 10, 2023 within the Memory and Human Rights Space, city of Buenos Aires.

This report sought to briefly present the main advances of the Argentine Republic in relation to the commitments assumed in the Madrid International Plan of Action on Aging of 2002. It represents the result of a process of articulation, participation, and exchange among the main actors involved in the construction of gerontological policies at the national level.

To this end, data was collected and systematized that made it possible to account for the situation of older persons in Argentina and the legislative advances and actions implemented in terms of gerontological policies by different national organizations and institutions were analyzed.

In the case of Argentina, the evaluation of these advances must be framed in the guidelines defined in the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons (CIPDHPM), approved and ratified in the country through Law No. 27,360. This regional instrument, which recognizes older persons as subjects of law, configures the regulatory and political framework from which policies and programs aimed at guaranteeing the fundamental rights of older persons are formulated, designed and implemented. From this paradigm, public institutions aimed at older persons have been consolidated: institutions were created at the provincial and municipal levels and organizations dedicated to old age and aging were strengthened at the national and provincial levels.

**Likewise, it is worth highlighting the importance of the functioning of different areas of civil society participation: the Federal Council of the Elderly, the main body of collective participation in which the main needs and orientations regarding public policies for old age**

**and aging with a federal criterion; the Advisory Body of Retirees and Pensioners of the National Social Security Administration; and the Participatory Councils of the INSSJP-PAMI.**

At the same time, **it is worth mentioning the advances in social security matters and the expansion of retirement and pension coverage, both contributory and non-contributory, and those regarding the right to access to health of older persons, especially through the actions of the National Institute for Social Services for Retirees and Pensioners, that guarantees health coverage for a large part of the elderly population in Argentina.** Advances in care policies have been a central aspect of the gerontological approach in Argentina in recent years: Care Services for the Elderly managed by both DINAPAM and INSSJP-PAMI are based on a model progressive care that includes everything from community care (such as home care and devices such as day centers and clubs) to institutional care, through Long Stay Residences.

Finally, **the importance that in recent years has been the educational and training actions in gerontology implemented by the national government organizations involved as well as by different public and private institutions, with the objective of training professionals, technicians, educators and the community in general.** In particular, the gender and sexual diversity perspective has been developed as a central approach in the formulation and execution of policies towards older persons.